

Tras una administración demócrata en la que el ingreso de extranjeros alcanzó un récord en EE.UU. Fin a ciudadanía, arrestos y expulsiones en masa: los polémicos planes migratorios de Trump

El republicano dijo que la seguridad fronteriza será su prioridad, pero la falta de financiamiento y de personal especializado, así como la reacción de estados demócratas y grupos humanitarios, podrían complicar sus planes, señalan los expertos.

EVIA LUNA GATICA

Desde las presidenciales de noviembre pasado en Estados Unidos, al menos cinco caravanas con decenas de migrantes se han formado en México, de personas que buscan llegar a territorio estadounidense antes de que asuma en el poder el 20 de enero Donald Trump, quien ha prometido implementar políticas migratorias mucho más estrictas que su predecesor, Joe Biden. Como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, la detención de personas en situación irregular y la deportación masiva de extranjeros, que incluso lo han llevado a amenazar a los países de la región con mayores aranceles si no reciben a estas personas de vuelta.

“(A los migrantes) los haré entrar en cualquier país, o no haremos negocios con esos países”, amenazó el Presidente electo, en una entrevista con la revista Time tras ser galardonado como la “Persona del Año 2024”, y quien ha sostenido que la seguridad fronteriza, la inmigración irregular y revocar las políticas de la era de Biden serán su “prioridad absoluta”. Esto con la ayuda de Tom Homan, un antiguo oficial de policía que será su “zar de la frontera”.

Las declaraciones de Trump se dan luego de que durante la presidencia de Joe Biden, que flexibilizó las normas de asilo, la migración neta anual (la cantidad de personas que entraron al país menos las que se fueron) promedió un total de 2,4 millones entre 2021 y 2023, es decir, el mayor aumento que se haya registrado en la historia del país, según un análisis de datos de The New York Times.

Uso del Ejército para expulsiones

En ese contexto, el nivel de la retórica antiinmigrante de Trump se intensificó en campaña, y llegó a prometer la “mayor deportación” de inmigrantes irregulares de la historia del país, que planea implementar con la ayuda del Ejército y mediante la



MIGRANTES caminan por el lado estadounidense del muro fronterizo en Jacumba Hot Springs, California, tras cruzar a pie desde México.

(la cantidad actual de inmigrantes sin autorización legal en EE.UU.), con recursos limitados, no solo sería extremadamente complicada, sino también extremadamente costosa”, comenta Patricia Foxen. “Al mismo tiempo, varias ciudades y estados ya han dado un paso adelante y se han comprometido a proteger a sus comunidades inmigrantes, muchas de ellas mediante ordenanzas de ‘ciudades santuario’”, agrega la experta.

“Políticas disruptivas”

Sumado a lo anterior, Donald Trump también prometió la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrada en la Constitución, que permite que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierta automáticamente en ciudadano estadounidense, y que se aplica incluso a los hijos de personas que se encuentran en el país de manera irregular, pero que según el republicano incentiva el “turismo de nacimiento”. A su vez, dijo que eliminará los estatutos de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la DACA (una política que permite a personas que llegaron al país como niños sin estatus legal recibir un periodo de protección contra la deportación), y el programa para Mantener a las Familias Unidas, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Además, estaría evaluando la construcción de nuevos centros de detención para migrantes, y los expertos esperan que se incrementen las medidas en busca de irregulares en los lugares de trabajo y hogares, dice Foxen. “Y si bien las organizaciones sociales recurrirán a la defensa de los derechos humanos, a la ley y a la Constitución para resistir los planes de inmigración de Trump, las políticas serán altamente disruptivas y dañinas para las comunidades de todo el país”, señala la experta de la NLADA.

declaración de “emergencia nacional”. Los extranjeros que quiere expulsar, a su vez, son aquellos que hayan sido condenados por delitos o que tengan órdenes de deportación vigentes.

El argumento del exmandatario es que los migrantes irregulares representan una amenaza importante para la seguridad pública (una tesis que es respaldada por gran parte de su electorado, según las encuestas), y que según el Diálogo Interamericano, podría desencadenar la expulsión de unas 150 mil personas.

“Las investigaciones, no obstante, han demostrado sistemáticamente que los inmigrantes cometen delitos en menor proporción que la población nacida en Estados Unidos”, explica a “El Mercurio” Patricia Foxen, antropóloga y directora de investigación de la Asociación Nacional de Asistencia Jurídica y Defensoría (NLADA) de EE.UU., una organización sin fines de lucro que pres-

ta servicios legales. “Tanto los inmigrantes legales como los ilegales tienen casi la mitad de probabilidades de cometer delitos, incluidos delitos violentos y delitos graves”, agrega la experta.

“El desafío logístico es que no hay suficiente personal en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para implementar esta política rápidamente y a gran escala. El Presidente Trump ha sugerido que utilizará a la policía local y estatal, y a la Guardia Nacional para complementar al DHS. Pero estos otros policías y militares no están capacitados para hacer este tipo de trabajo, y llevaría tiempo asegurarse de que estén cumpliendo la ley”, comenta, por su parte, Louis DeSipio, experto en migración de la Universidad de California.

Consecuencias para terceros países

Para implementar esta políti-

ca de deportación, el expresidente dijo, además, que “invocará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798” para “desmantelar cada red criminal de migrantes que opere en suelo estadounidense”. La ley, que solo ha sido invocada en tiempos de guerra, le permite calificar como “enemigo extranjero” a cualquier persona mayor de 14 años que resida en EE.UU., pero que sea ciudadana de un país denominado como “hostil”, y que podrá ser arrestada y deportada sin importar su estatus migratorio.

Para ello, el Presidente electo y su equipo ya comenzaron a negociar con otros países la recepción de migrantes deportados, y si estos no son aceptados en sus países de origen, serán enviados a terceros países, entre ellos, las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y Granada, señala NBC News, e incluso estarían contemplando enviarlos a naciones centroamericanas como Honduras, Guatemala,

Panamá y El Salvador. Estos últimos, no obstante, han advertido “no tener capacidad” para recibirlos, dijo Antonio García, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, mientras que organizaciones sociales sostienen que su retorno puede empujarlos a crisis

PREPARACIÓN

México dijo que se está preparando para recibir a miles de mexicanos ante las posibles deportaciones.

económicas y humanitarias aún más profundas, alimentando la migración en el futuro, señala The Associated Press.

“Además, muchas fuerzas de seguridad locales no tienen la tecnología, el personal ni otros recursos para aplicar políticas de inmigración de amplio alcance. La logística de rastrear, detener y deportar a 11 millones de personas